

Pronunciamiento del Consejo Superior de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”

El Salvador debe optar por la vida y la paz ahora

Después de múltiples y largas sesiones, la negociación del fin de la guerra entre el gobierno de El Salvador y el FMLN parece haber llegado a su momento decisivo. Hasta hace unas semanas, ambas delegaciones negociadoras terminaban sus sesiones sin acuerdos sustantivos, pero sus voceros nos anunciaban que se habían hecho avances. Más recientemente, los voceros gubernamentales nos han dicho repetidamente que ya estaba discutido todo, que la firma del cese del fuego sólo dependía del FMLN. Sin embargo, la realidad era muy otra. El Secretario General de las Naciones Unidas se ha visto obligado a aceptar públicamente que la negociación se encuentra estancada al responder a la petición de las superpotencias para que participara directamente en ella, a fin de que ésta concluya pronto en la pacificación de El Salvador.

En consecuencia, la negociación parece haber dado de sí todo lo que podía dar, sin haber conseguido su primer objetivo, parar la guerra. La negociación, y con ella el futuro de El Salvador, se encuentran en un momento muy crítico; para superarlo es necesario que tanto el gobierno, la Fuerza Armada y Estados Unidos, como el FMLN den pasos nuevos. Es decir, nos encontramos ante la posibilidad de optar por poner fin a la guerra y su terrible secuela de destrucción por la vía negociada o por seguir matándonos mutuamente y destruyendo la infraestructura del país, hipotecando aún más su desarrollo por más décadas.

Ante esta grave alternativa para el presente y el futuro de El Salvador, nuestra universidad se siente obligada a decir su palabra y a pronunciarse por la primera opción, la opción por el fin de la guerra y por una vida más justa para las mayorías salvadoreñas.

1. El estado actual de la negociación

El proceso de negociación ha sido muy intenso desde la llegada del actual gobierno a la presidencia de la república. Muy pronto, hubo dos importantes rondas de diálogo con el FMLN en México (13-15 de septiembre de 1989) y en San José (16-18 de octubre de 1989). Pero el proceso se rompió tras el atentado terrorista contra la sede de FENASTRAS, el 31 de octubre de ese año, al cual siguió la ofensiva de noviembre de 1989.

A comienzos de 1990, el gobierno y el FMLN acordaron, en Ginebra (4 de abril de 1990), reanudar el proceso de negociación, bajo los auspicios de las Naciones Unidas. A la reunión de Ginebra siguió un encuentro en Caracas (16-21 de mayo de 1990), donde se determinó la agenda y el calendario; hubo una nueva sesión en Oaxtepec (19-25 de junio de 1990), donde se comenzó a discutir la agenda de Caracas, cuyo primer punto era el tema de la Fuerza Armada. Aquí, el tema del ejército, que ya había sido motivo de discordias en México y San José en 1989, se mostró con toda claridad como el nudo gordiano de la negociación.

A la sesión de Oaxtepec siguieron tres encuentros más en San José (20-26 de julio, 17-22 de agosto y 13-18 de septiembre de 1990). En todos ellos, la piedra de tropiezo siguió siendo el tema de la Fuerza Armada. Al igual que en los encuentros anteriores, el gobierno mantuvo su posición de reformar el ejército a través de medidas formales y de mecanismos administrativos, que no iban a las raíces del problema. El FMLN, por su lado, endureció su posición. La reunión de julio fue salvada por el importante acuerdo sobre los derechos humanos. Así, llegó el 15 de septiembre de 1990, fecha en la cual el calendario de Caracas contemplaba la firma del cese del fuego.

Siguió una reunión de urgencia en México (29-31 de octubre de 1990) con el propósito de acordar una mecánica que agilizara la discusión de los temas y facilitara los acuerdos. En esa sesión, el mediador entregó a las partes un documento de trabajo que intentaba recoger los consensos sobre la cuestión de la Fuerza Armada, era un borrador de propuestas para la adopción de acuerdos conducentes al cese del fuego.

A comienzos de enero de 1991 tuvo lugar un nuevo encuentro en México, según la nueva mecánica propuesta. Siguieron dos reuniones más en México (1-2 de febrero) y en Costa Rica (19-20 de febrero), en las cuales el gobierno endureció aún más su posición, respaldado por las fuertes críticas de Estados Unidos a la mediación de las Naciones Unidas y por el desembolso de la ayuda militar. Entre el 4 y el 27 de abril se tuvo una larga sesión en México, de la cual salió el acuerdo sobre las reformas constitucionales. Siguieron tres sesiones más (Cara-



balleda, 25 de mayo-2 de junio; Querétaro, 16-22 de junio, y México, 9-11 de julio).

Después de esta larga serie de sesiones, en la cual las partes sólo han podido llegar a dos importantes acuerdos, el de los derechos humanos y el de las reformas constitucionales, el mediador ha concluido que la negociación se encuentra entrampada en el tema de la Fuerza Armada. Para explorar la posibilidad de seguir adelante, el Secretario General de las Naciones Unidas ha convocado a las partes para reunirse con él en Nueva York, los días 16 y 17 de septiembre.

2. El obstáculo principal para el cese del fuego

Así, pues, el gobierno de El Salvador y el FMLN han dialogado bastante; quizás por eso los voceros gubernamentales han repetido tanto que ya está todo dicho, que ahora corresponde al FMLN tomar decisiones. Indudablemente, esta larga serie de encuentros ha sido buena en sí misma para exponer y conocer las posiciones encontradas de los dos adversarios. Hay que reconocer que estos encuentros se han mantenido pese a las presiones y a las acciones de la extrema derecha para forzar a ambas partes a retirarse de la mesa de negociación y pese también a ciertas acciones de las dos partes que bien pudieran haber sido tomadas como excusa por la otra parte para retirarse de la mesa.

De todos estos encuentros se han seguido bienes para el proceso de pacificación, pero lo hecho es aún insuficiente, porque, en realidad, se ha negociado muy poco. Las decisiones importantes aún no han sido tomadas ni las concesiones más importantes han sido dadas por ninguna de las dos partes. En esto, la responsabilidad es de ambas partes.

La conversión del poderío militar en fuerza política sólo puede hacerse paulatinamente, paso a paso.

A ello se debe que la negociación se encuentre en un momento muy crítico y no a dificultades de procedimiento ni a la mediación.

El gobierno dice buscar que el FMLN se convierta en un partido político desarmado, que participe en el juego democrático. El FMLN mismo ya se ha comprometido de manera pública para convertir su poderío militar acumulado en una fuerza política democrática. En nuestra revista Estudios Centroamericanos se pueden leer sus planes al respecto. Esto significa que ambas partes están convencidas de la imposibilidad de obtener un triunfo militar; es decir, coinciden en que la prolongación de la guerra no es alternativa para el país. Entonces, ¿por qué no se firma el cese del fuego y se desmoviliza la fuerza militar del FMLN? ¿Qué impide el fin de la guerra? En definitiva, ¿por qué no sigue adelante la negociación?

La conversión del poderío militar en fuerza política sólo puede hacerse paulatinamente, paso a paso. No es real pedir al FMLN que abandone las armas de un golpe para permitirle la acción política, porque, de momento, la fuerza y la posibilidad de ésta se fundan en el poder que le dan sus armas. Quizás esto sea políticamente heterodoxo, pero es que nuestra situación no es muy ortodoxa. Además, no podemos ignorar de dónde venimos, dónde estamos y por qué estamos donde estamos. Por eso, es importante un cese previo en el uso de las armas, pero en el entendido que las dos partes cesan de hacer uso de aquéllas. Dado que no se ha producido un desequilibrio militar a favor de una de las dos partes, seguir insistiendo en la desmovilización inmediata de las fuerzas militares del FMLN es repetir inútilmente un argumento muy sabido e ineficaz.

El gobierno argumenta su petición de desmovilización inmediata asegurando que la situación ha cambiado sustancialmente, pero, si eso es así, debiera confirmar su juicio con hechos. Los informes más conservadores sobre la situación de los derechos humanos muestran que éstos se siguen violando y, más aún, que esas violaciones han ido en aumento en los últimos meses. Sólo ha habido una ligera baja en cuanto a los asesinatos, pero las cifras de las víctimas de los escuadrones de la muerte siguen presentando niveles alarmantes. Más aún, las cifras registradas son las más elevadas del último año en varias categorías (ver Proceso, 1991, 482). La repetida presencia anual del representante especial de las Naciones Unidas para los derechos humanos y la instalación de ONUSAL son otras muestras palpables del inaceptable estado en el que se encuentran los derechos humanos en El Salvador para la comunidad internacional. Mientras el gobierno no pueda garantizar

y defender la vida de los salvadoreños, la afirmación de que la situación ha cambiado no tiene realidad.

La condición primera, y también más difícil, para este cambio, que haga posible abandonar la vía militar para dirimir los conflictos sociales y políticos, es el cambio radical de la Fuerza Armada y el establecimiento de una policía civil para reemplazar a los cuerpos de seguridad. Tanto el ejército como la nueva policía deben respetar plenamente la actividad política y no deben interferir, en modo alguno, con la voluntad popular. Decir que esto ya se está dando es pecar de optimismo y de falta de objetividad. Ciertamente, pueden reconocerse algunas mejoras, pero con la misma certeza debe asegurarse que son insuficientes. Y lo son en el momento de pedir responsabilidad por la masiva y sistemática violación de los derechos humanos, en el momento de decir qué jefes y qué oficiales han cambiado drásticamente sus hábitos, sus actitudes y sus formas colectivas de actuar, en el momento de asegurar que el proceso de mejora avanza con la radicalidad exigida por la agónica situación del pueblo salvadoreño. Hasta ahora, la Fuerza Armada no ha dado un sólo paso significativo para corregir las denuncias que sus miembros hicieron en la Proclama de octubre de 1979.

Mientras no haya un avance firme en la dirección apuntada por esa proclama —llámesele reestructuración, depuración o mejora de la Fuerza Armada—, el FMLN tiene suficientes razones objetivas para desconfiar de ella y para exigir medidas drásticas y profundas de cambio, que le permitan responsablemente renunciar a su actual poder militar paralelo. Por eso, en la mesa de negociación, el FMLN está exigiendo, como garantía, participar en las estructuras de la Fuerza Armada hasta la verificación de los acuerdos y un territorio para mantener a su fuerza militar, mientras se da la desmovilización paulatina. El gobierno niega como absurdo lo primero y se ha estado resistiendo a aceptar lo segundo. Y aquí está el obstáculo principal para que la negociación desemboque en el cese del fuego y en la pacificación del país.

La mediación de las Naciones Unidas, entendiendo la desconfianza del FMLN hacia la Fuerza Armada actual, busca medios eficaces para ofrecerle condiciones y garantías para su desmovilización militar y para su transformación en un partido político. La Fuerza Armada actual no es suficiente garantía; es lo que hemos tenido en el pasado y lo que tenemos en el momento presente. Mientras esto no sea resuelto razonable y realísticamente, es inútil hablar de avances notables en el proceso de democratización.

3. Necesidad de soluciones radicales

Ha llegado la hora, por lo tanto, de que ambas partes, abandonando

inmediatismos, propagandas, miedos y desconfianzas, demuestren con los hechos, más que con las palabras, en la mesa de negociación y en el interior del país, que realmente quieren terminar con la guerra. Ponerle fin es, objetivamente, una necesidad histórica, porque la guerra ha traído enormes males al país, y es, subjetivamente, un anhelo de la mayor parte del pueblo. Para superar las diferencias que impiden llegar a este final es necesario que ambas partes se comprometan en un paciente ejercicio de realismo, teniendo siempre delante el mayor bien del pueblo salvadoreño.

La condición ineludible para que cese la guerra es habilitar otra vía distinta y eficaz. Por eso, los acuerdos políticos son imprescindibles para comenzar a poner fin poco a poco a las acciones militares y violentas, y para empezar a transitar segura y eficazmente la vía política. Ambas partes tienen que convertir su poderío militar acumulado en una fuerza de carácter político. La Fuerza Armada, reduciendo sus fuerzas a las necesidades de la defensa de la soberanía y desarticulando su inmenso aparato guerrillero; el FMLN, desmovilizando sus fuerzas y desmontando su aparato militar. En consecuencia, esta es una tarea que no compete sólo al FMLN. La tarea es inmensa y complicada, por eso mismo debe aceptarse su gradualidad.

Más concretamente, el paso político fundamental sería asegurar todo tipo de actividad política que no tuviera relación directa con la violencia. Las dos partes deberían hacer un esfuerzo para separar metodológicamente lo que es lucha militar de lo que es lucha política, cualesquiera sean las conexiones entre una y otra. Por consiguiente, tanto al gobierno y a la Fuerza Armada como al FMLN se les plantea el desafío de enfrentar no militar ni con medios terroristas, sino políticamente, los graves problemas del país.

En consecuencia, no es aceptable, bajo ningún concepto, la inflexibilidad gubernamental, desde la cual se afirma que el gobierno ya ha concedido todo lo que tenía que conceder, que ahora es el FMLN el que tiene que abandonar las armas e incorporarse a la vida política. Para que esto sea posible, y viable, es necesario que haya cambios radicales que aún no se han dado. El mismo presidente Cristiani lo ha reconocido abiertamente al afirmar que la paz aún puede reclamar más vidas (New York Times, 26 de agosto de 1991, A3). Pero esto es inaceptable, porque la guerra ya se ha llevado consigo demasiadas vidas; sin embargo, con esas palabras el Presidente de la República reconoce que todavía no se han dado los pasos necesarios para garantizar la vida de los salvadoreños.

Mientras sigan los excesos, para ambas partes será imposible confiar en acciones no clandestinas ni violentas. Por eso, por lo que toca a la parte gubernamental y a la Fuerza Armada, es urgente controlar a

los escuadrones de la muerte y a otros grupos similares —como el de los secuestradores, sobre el cual se guarda un inquietante silencio gubernamental. Las vinculaciones de estos grupos con la estructura militar están fuera de toda duda, hasta el punto de que algunos jefes y oficiales han sido separados de una u otra forma de la Fuerza Armada por este motivo.

No puede asegurarse que esas vinculaciones no sigan y mucho me-



nos puede comprobarse que se haya aclarado cuáles han sido y son las redes y quiénes han sido y son los responsables de las acciones mismas. El mismo presidente Cristiani, sin duda acosado por la presión internacional y nacional, ha intentado defender la intocabilidad de la Fuerza Armada declarando a la prensa estadounidense (New York Times, 26 de agosto de 1991, A3) que es mejor mantener a los oficiales y jefes sospechosos de abusos y violaciones dentro del ejército, porque ahí están controlados, que expulsarlos de él, porque, entonces, nadie sabe qué hacen. Estas declaraciones además de ser inaceptables ética y políticamente, fomentan la impunidad de los miembros de la Fuerza Armada.

El FMLN, por su parte, aunque ya está dando pasos importantes para convertirse en un partido político —ya ha separado sus estructuras militares y políticas, y ha establecido una comisión para dirigir su entrada en esta nueva fase—, también tiene que hacer renovados esfuerzos, realistas y audaces al mismo tiempo, para abrirse espacio político. En este sentido, algunas de sus últimas acciones —ciertamente, el secuestro para obtener un rescate, el sabotaje y los ataques indiscriminados que afectan a la población civil— no coadyuvan al proceso de conversión política y minan su credibilidad. Si bien, el FMLN tiene derecho a buscar espacios políticos garantizados para sacar adelante su partido político y su propio proyecto de nación, no puede, bajo ningún pretexto, mantener prácticas violatorias del derecho internacional humanitario.

El FMLN también debe cultivar su unidad interna, no sólo para que sus acciones respondan a una política consistente, y así tengan más fuerza, sino también para poderse presentar políticamente como un todo que favorezca realmente los intereses de las mayorías populares. En este sentido, el FMLN debe dar ejemplo de cómo llegar democráticamente a consensos políticos, pues si sus estructuras internas son incapaces de ello, difícilmente va a ser capaz de conseguir consensos con otras fuerzas políticas.

Ya es hora también para que el gobierno y el Congreso de Estados Unidos cambien su política cortoplacista hacia El Salvador y comienzen a pensar seriamente en el bienestar de las mayorías populares y en el futuro del país. La pacificación de El Salvador exige al gobierno de Washington convertir su enorme ayuda militar en ayuda para el desarrollo económico. Ha llegado el momento de mostrar claramente que la vía militar no es alternativa para El Salvador.

Todos estos esfuerzos exigen de todas las partes, seriedad, audacia y lucidez. La lucidez política no se demuestra haciendo malabarismos o haciendo ejercicios de prestidigitación para mejorar la imagen. La lucidez política se demuestra enfrentando los problemas de raíz para darles

soluciones radicales. Y lo que El Salvador está exigiendo ahora es audacia política y soluciones radicales.

4. Terminar la guerra para comenzar a construir la convivencia pacífica

La guerra es la tarea de la destrucción del país y ya ha destruido demasiado y ha demostrado su ineficacia para resolver los graves problemas de El Salvador. La guerra debe ser detenida y las energías y los recursos invertidos en ella deben ponerse al servicio de la reconstrucción y de la reconciliación nacional.

Ya es hora de que todos tengamos la convicción firme de la inutilidad de la guerra, de la necesidad de la paz, y, por lo tanto, de despejar la vía para poder comenzar a vivir sin guerra. La pacificación es necesaria para emprender otra tarea ardua y difícil, la resolución de los angustiosos problemas que afectan a la mayor parte de la población.

Para que la paz sea realidad no sólo hace falta implementar el respeto irrestricto de los derechos humanos, sino que también es ineludible encontrar alternativas socioeconómicas que, en vez de empobrecer más a la mayoría de los salvadoreños y de enriquecer a una reducida minoría, pongan en marcha un proyecto de nación que permita un desarrollo económico sostenido, que no profundice las escandalosas diferencias sociales y económicas actuales. Es necesario detener la guerra para pensar y para poner en marcha este proyecto. Mientras no haya paz, es imposible pensar en el desarrollo económico que necesitamos; pues la guerra seguirá llevándose por delante la mayor parte de nuestros recursos. La paz es necesaria para pensar alternativas que pongan más el acento en lo político que en lo militar, para establecer estructuras de concertación social y para promover las acciones sindicales y gremiales legítimas.

Asimismo, la cuantiosa ayuda militar estadounidense debe también desplazarse hacia el desarrollo económico. Mientras siga la guerra, toda la inversión y todos los planes económicos serán tergiversados por la actividad militar. La ayuda estadounidense debería ser destinada a corregir las causas económicas del conflicto y sus efectos, en vez de ir destinada a la profundización del conflicto armado y de sus causas. En unas semanas, el Congreso estadounidense tendrá una nueva oportunidad para demostrar si está por una paz justa o por la prolongación de la guerra y la destrucción. Si los cuatro mil millones de dólares (32

La Fuerza Armada no ha dado un sólo paso significativo para corregir las denuncias que sus miembros hicieron en la Proclama de octubre de 1979.

mil millones de colones) facilitados por el Congreso estadounidense para la guerra se hubieran canalizado hacia el desarrollo socioeconómico, la guerra no sólo se habría acortado radicalmente, sino que quizás no hubiera sido necesaria. Por lo tanto, ya ha llegado el momento de terminar con la ayuda militar estadounidense para el ejército salvadoreño.

5. La hora crucial para optar por la vida

El gobierno y la Fuerza Armada de El Salvador, por un lado, y el FMLN, por el otro, enfrentan una responsabilidad histórica difícil, pero que, vista la historia pasada y reciente, es esencial asumir. En el encuentro de Nueva York, los días 16 y 17 de septiembre, tienen que resolver el problema más grave e inmediato de El Salvador, detener la guerra, para poder enfrentar luego los otros graves problemas que le dieron origen, en una palabra, la injusticia estructural. Dada la gravedad de la situación y lo que está en juego, ambas partes deben recurrir, creativa y audazmente, a cualquier medio que lleve a la pacificación del país, incluyendo el encuentro personal del presidente Christiani con la comandancia general del FMLN. No puede ahorrarse ningún recurso cuando está en juego un bien tan universal.

Es posible que la solución última esté en la desmilitarización total de la República, pero tal desmilitarización es, de momento, muy difícil. Hasta que no se den las condiciones para comenzar a desmilitarizar El Salvador, hay que entrar en una profunda reforma militar, que afecta a ambas partes en conflicto de modo distinto, y hay que entrar en ella cuanto antes.

El Salvador se encuentra en un momento crucial de su historia, un momento que no puede desaprovecharse, porque en él están en juego la vida de los salvadoreños y el futuro del país. Ha llegado la hora de las opciones decisivas y de las medidas audaces, la hora de comprobar quiénes están por la vida y el bienestar del pueblo salvadoreño.

San Salvador, 15 de septiembre de 1991.